

Steve Ellner

La transformación del movimiento sindical y la sociedad civil en Venezuela: ¿revolución o paralelismo?

Desde los comienzos del movimiento laboral venezolano en 1936, los partidos políticos han ejercido una influencia importante en los sindicatos. Algunos historiadores argumentan que la experiencia venezolana a este respecto es distinta de aquella de otros países (como Inglaterra en el caso del *Labor Party*), donde la organización de los primeros sindicatos es anterior a la fundación de partidos políticos modernos, es decir, de masas. Aparentemente, en Venezuela, la secuencia fue al revés. Según este punto de vista, la sociedad civil (incluyendo a los sindicatos), como también los “lazos sociales tradicionales”, se encontraban prácticamente ausentes al comienzo del período moderno en 1936, dejando un vacío que sería llenado por los partidos políticos emergentes (Levine 1978: 85-86; Coppedge 1994: 31). Sin embargo, el hecho es que en Venezuela la fundación de las primeras organizaciones laborales relativamente estables coincidió con la fundación de los primeros partidos políticos modernos en 1936, después de la muerte de Juan Vicente Gómez. Recientemente, varios estudiosos han vuelto a examinar el año 1936, demostrando la efervescencia del movimiento popular y el grado de autonomía de su actuación (Battaglini 1993).

Algunos analistas políticos argumentan que, a partir de 1936, el movimiento laboral se ha caracterizado por una relación de sumisión frente a los partidos y al Estado (Salamanca 1995: 199-200; 1998). Dirigentes del partido Causa R (antes de cambiar de línea a mediados de los años 90) defendieron vehementemente esta interpretación. Sin embargo, en varias situaciones históricas claves los dirigentes sindicales divergieron de las posiciones de los líderes de su partido político respectivo. Por ejemplo, los dirigentes de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) eran partidarios de llamar a una huelga general en vísperas del golpe que derrocó al presidente Rómulo Galle-

gos en 1948, propuesta vetada por la dirigencia política (Ellner 1980: 140). En 1958-1959, los dirigentes de la CTV defendían una política de unidad entre los partidos y proponían un candidato de consenso para las elecciones presidenciales de 1958 con el propósito de enfrentar a las fuerzas “pérezjimenistas”. Este planteamiento también suscitó una reacción negativa entre la dirigencia partidista (Ellner 1995: 37-38).

Esta discusión histórica sobre la relación entre el movimiento laboral y los partidos políticos no es ajena al debate actual sobre estrategias laborales. A partir de la elección de Hugo Chávez en 1998, la política venezolana ha estado marcadamente polarizada, tendencia reforzada por los medios de comunicación que se han puesto en casi su totalidad a la disposición de las fuerzas políticas de la oposición. En su cobertura del movimiento laboral organizado, los medios han hecho hincapié en la postura vehementemente anti-gobierno de la cúpula de la CTV y, en particular, de su presidente, Carlos Ortega. Así, han estimulado las posturas políticas de los dirigentes laborales, mientras que soslayan, o simplemente ignoran, las reivindicaciones y otros planteamientos concretos de los trabajadores. En el seno de la CTV, sin embargo, muchos sindicalistas han expresado una preocupación considerable por la manera en que el movimiento laboral viene siendo utilizado por intereses políticos y por el acercamiento con organizaciones que no comparten los objetivos de los trabajadores o, como en el caso de Fedecámaras, tienen intereses diametralmente opuestos.

El problema tampoco se aborda de una manera monolítica entre los chavistas. Lo más importante es que los líderes que se han opuesto a las huelgas promovidas por la CTV entre 2001 y 2003 y que se manifiestan receptivos frente a la propuesta de una confederación obrera alternativa, no están menos dispuestos a expresar sus reservas frente a la posibilidad de que se esté promoviendo una organización oficialista que estaría bajo las órdenes del Estado. En consecuencia, Chávez puede movilizar apoyo a una política de repudio a los dirigentes tradicionales de la CTV, sobre todo entre los sectores populares; sin embargo, no puede evitar que quede la sospecha de que se está trabajando en función de la creación de un sindicalismo de corte oficialista.

En este artículo, proponemos analizar el problema de la autonomía del movimiento laboral, abordándolo desde diversos ángulos. En pri-

mer lugar, examinaremos las tendencias, tanto dentro de la CTV como entre los sindicalistas chavistas, que abogan por una política autónoma para los trabajadores organizados. También se analizarán las posiciones de aquellos dirigentes independientes que hayan mostrado que no están dispuestos a tomar partido en el enfrentamiento político entre chavistas y anti-chavistas. En segundo lugar, examinaremos problemas específicos, como las prestaciones sociales y el sistema de seguridad social, con el propósito de establecer una distinción entre los intereses y los puntos de vista de la clase obrera y de los partidos respectivamente. Al formular posturas frente a estos problemas, los tres sectores mencionados enfrentan problemas y corren riesgos. Si la CTV deja de enfatizar suficientemente los objetivos propiamente laborales, pierde su razón de ser y se confunde con el llamado monótono y repetitivo para que “se vaya Chávez”, con la que puede ser percibida como un aliado fijo de Fedecámaras. De la misma manera, si los sindicalistas chavistas hacen hincapié en los objetivos políticos por encima de los reclamos propiamente laborales, la nueva federación provocará un rechazo entre los trabajadores, precisamente por una ausencia de autonomía frente al Estado, elemento imprescindible para que prospere cualquier movimiento laboral. Por último, los independientes necesitan aclarar sus objetivos en torno a problemas laborales porque, si no, se desdibuja su identidad o, peor, terminan absorbidos por uno u otro de los bandos en conflicto.

1. La CTV y la pérdida de autonomía en los años noventa

Frente a los inicios del programa neoliberal del presidente Carlos Andrés Pérez (CAP) y el Caracazo de febrero de 1989, la CTV llamó a una huelga general de 24 horas para el 18 de mayo. Durante el resto de la administración de CAP, dirigentes laborales acompañaron a congresistas de Acción Democrática y otros partidos en esfuerzos para obstaculizar, y demorar la implementación de una legislación de inspiración neoliberal. Aquellos miembros del gabinete partidarios del neoliberalismo culparon a los políticos y dirigentes laborales de AD (Acción Democrática) de haber traicionado al presidente, sabotando su programa de reformas y preparando el terreno para su caída (Naím 1993: 47-49). No obstante, la oposición de la CTV a Pérez era relativa porque, aparte de la huelga del 18 de mayo de 1989 y algunas protes-

tas de calle organizadas en febrero de 1990, la organización sindical no se esforzó por movilizar a sus bases para oponerse al programa económico del gobierno.

Con la llegada de Rafael Caldera a la presidencia, el comportamiento de los dirigentes de AD cambió y, de hecho, formaron una alianza no-oficial con el gobierno, a cambio de un compromiso de garantizar la estabilidad de sus militantes en sus puestos en la administración pública. Hay quienes consideran la “Agenda Venezuela” de Caldera menos neoliberal que el “paquete económico” introducido por CAP. En todo caso, Caldera evitó aquel “tratamiento de *shock*” de Pérez, quien sorprendió al país con el anuncio de su programa económico a sólo días de haber asumido el gobierno. Caldera esperó hasta que el público se encontrara más dispuesto a aceptar un cambio radical de política, ablandado a consecuencia del estancamiento económico de sus dos primeros años de gobierno.

El abandono, por parte de los dirigentes de la CTV, de aquellas posturas independientes y críticas que habían mostrado frente a CAP, se hizo particularmente evidente frente a las reformas que afectaban a las prestaciones sociales y al sistema de seguridad social. A diferencia de los dirigentes del movimiento obrero en otros países, quienes protestaron en contra de las amenazas a estas conquistas tradicionales, llegando a veces hasta a dividirse en torno a las disputas sobre cómo enfrentarlas, los dirigentes de la CTV terminaron apoyando las medidas propuestas, mansamente y por unanimidad. Tomando en cuenta la importancia de estas reformas, y cómo la reacción de la CTV a ellas explica su pérdida de prestigio, hace falta examinar en más detalle la posición de la dirigencia cetevista frente a las dos medidas.

Caldera intentó generar un apoyo amplio para sus políticas neoliberales con la creación de una Comisión Tripartita, con el fin de redactar la propuesta legislativa para reformar los sistemas de seguridad social y de prestaciones sociales. Cuando, durante la discusión sobre una reforma de la Ley del Trabajo en 1990, Fedecámaras y el gobierno de Pérez habían propuesto la eliminación de la “retroactividad”, la CTV se había negado a discutir el asunto. Durante los primeros años de los noventa, la CTV mantuvo esta postura, aunque ya los dirigentes de los partidos más importantes, incluyendo a AD, COPEI y el MAS (Movimiento al Socialismo), expresaban su apoyo a la reforma. En su 11º Congreso, celebrado en 1995, la CTV ratificó su posi-

ción, pero ya en enero del año siguiente llegó a un acuerdo tentativo con Fedecámaras en el marco de la Tripartita para eliminarla.

La CTV fijó tres condiciones para que se abandonara la retroactividad: una cláusula sobre el costo de la vida; el derecho del trabajador de elegir entre el viejo y el nuevo sistema de pago por despido; y, finalmente, la implementación de un sistema de seguridad social efectivo para reemplazar el existente, cuya prestación de servicio había deteriorado seriamente. No obstante, el acuerdo final de la Comisión Tripartita, presentado al país por televisión en una ceremonia encabezada por el presidente Caldera, no incorporó ninguna de estas tres exigencias. Dirigentes de la CTV expresaron su satisfacción por las promesas de dirigentes empresariales de que la eliminación de la retroactividad llevaría a salarios más altos y a una disminución del desempleo, pero ninguna de las dos cosas se cumplieron. El acuerdo de la Comisión Tripartita sí incorporó una exigencia importante de la CTV: la creación de un “fondo de solidaridad” para que los trabajadores peor pagados pudieran recibir más que el mínimo establecido por ley. Sin embargo, el Congreso vació esta previsión de todo sentido, ya que la ley de seguridad social aprobada bajo Caldera asignó solamente 1% del salario del trabajador al fondo solidario. La CTV avaló tanto la reforma de la Ley del Trabajo promulgada en junio de 1997, que eliminó la retroactividad, como la legislación que básicamente privatizó el sistema de seguridad social.

A partir de 1974, cuando el pago por despido se definió como un “derecho adquirido” (por el decreto-ley número 124), el sistema había funcionado como una especie de sistema de seguridad social, una función que se debilitó marcadamente con la reforma de 1997. Esta reforma neutralizó el objetivo central del sistema tal como venía funcionando, que era de proporcionar al trabajador despedido una cantidad apreciable de dinero para poder enfrentar períodos prolongados de carencia de empleo formal. El problema central era la eliminación de la retroactividad (que en Venezuela tenía mayor alcance que en cualquier otro país del continente), lo que había determinado que el pago por despido se calculaba sobre la base del último pago mensual, multiplicado por los años de servicio. En efecto, calcularlo de esta manera compensa al trabajador por la pérdida de poder adquisitivo de sus prestaciones sociales debido a la inflación. La reforma de 1997, en cambio, calculaba el pago sobre la base del salario recibido durante

cada mes del empleo y su cálculo reflejaba los estragos que significaba la inflación para el poder de compra de los asalariados. Después de la reforma, muchos empleadores empezaron a pagar las obligaciones legales por este concepto al terminar cada año, en lugar de esperar que el empleado dejara el trabajo (una práctica anteriormente limitada a empresas pequeñas no sindicalizadas). Los trabajadores, ansiosos por recibir un pago que complementara sus salarios y con el temor de que la inflación pudiera comer los montos acumulados para el pago de despido, aceptaron la práctica sin objeciones. En aquellos casos en que la compañía guardara los montos obligados para un eventual despido, la reforma de 1997 otorgó al empleado el derecho de retirar hasta un 75% para ciertas contingencias. En la práctica, se autorizaba a los empleados aprovechar estos retiros como un recurso normal y hasta regular, de manera que, al terminar su relación laboral con la empresa, no quedaba casi nada. De esta manera, al eliminar la retroactividad, la reforma desvirtuó el objetivo central del sistema vigente y lo sustituyó por lo que equivale a un bono anual.

La CTV recibió críticas muy duras por su participación en la formulación de la reforma de 1997, sobre todo porque se trataba de un sistema de retroactividad que había estado vigente desde el año 1936. La CTV había estado acompañada en las negociaciones por las otras centrales menores, las de inspiración socialcristiana, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación de Sindicatos Autónomos de Venezuela (CODESA), y la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) (dominada por el Partido Comunista). Ésta última fue la única que se negó a firmar el acuerdo final. Mientras tanto, Chávez, que recién empezaba su campaña electoral, se sumó al coro de quienes criticaban la reforma. PROVEA (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos), la organización de defensa de los derechos humanos, apoyó un intento de anular la reforma por violar el carácter inviolable de los derechos adquiridos de los trabajadores (plasmado en el Artículo 3 de la Ley del Trabajo).

El sistema de seguridad social privatizado que introdujo Caldera favorecía a aquellos trabajadores que ganaban sustancialmente más que el salario mínimo. Según la nueva ley, todos los trabajadores tendrían que depositar un porcentaje de su salario en un “fondo de pensiones individual” registrado a su nombre, como también en un “fondo

solidario” que beneficiaría a todos aquellos cuya pensión no alcanzara el mínimo establecido. Sin embargo, a diferencia de los “sistemas mixtos” de otros países como Uruguay, los trabajadores de bajos salarios no podrían recibir ingresos de ambos fondos simultáneamente, de manera que recibirían el simple mínimo establecido por la ley. La “solidaridad” también se encontraba limitada por el hecho de que los trabajadores de la economía informal (incluyendo a aquellos con ingresos mayores) tenían pocos incentivos para incorporarse al sistema.

Al aceptar el nuevo sistema, la CTV también abandonó otra posición defendida hasta ese momento: la reestructuración del Instituto Venezolano de Seguro Social (IVSS) en lugar de su eliminación. Muchos pensionados (incluyendo uno de sus dirigentes, Edgar Silva) culparon a la CTV porque sus representantes en la junta directiva del IVSS no lograron impedir el deterioro de la institución durante las décadas anteriores. Según Silva, la CTV compartía la responsabilidad de una política (aplicada durante los años anteriores) que, en forma irresponsable, había juntado los presupuestos de los distintos subsistemas de la seguridad social para prestar dinero sin suficientes garantías, hasta a instituciones afiliadas a la CTV (Silva, entrevista personal, Caracas, 7 de mayo de 2003).

Uno de los argumentos principales esgrimidos por los neoliberales a favor de la reforma era, que ofrecía al trabajador “el derecho de elegir”. Esta postura evidentemente responde a la glorificación del individualismo típico del neoliberalismo. De hecho, el presidente Bush ha recurrido al mismo argumento para justificar su política de una privatización parcial del sistema de pensiones estadounidense, como también a favor de la introducción de un sistema de *vouchers* en las escuelas públicas, lo que apunta hacia una privatización del sistema educativo. En Venezuela y en América Latina en general, este mismo argumento ha sido utilizado para justificar la privatización de la seguridad social y del sistema de prestaciones sociales. No obstante, en el caso venezolano, este “derecho a elegir” es muy limitado. La reforma de 1997 contempla tres sistemas para guardar las prestaciones sociales de los trabajadores: Fideicomiso, un fondo de prestaciones sociales, o acreditarlas al trabajador en la contabilidad de la empresa. A pesar de que la Ley del Trabajo (en el Artículo 108) otorga al trabajador el derecho de elegir entre estas alternativas, en la práctica, muy pocos patronos, si hay alguno, consultan a sus trabajadores. Es más, bajo los

términos de la legislación introducida por Caldera sobre seguridad social, el derecho del trabajador de elegir entre planes de jubilación alternos, y sobre quienes los iban a administrar, también resultó ser muy limitado. En la práctica solamente tenía cierto sentido para los trabajadores mejor pagados, porque la gran mayoría con ingresos cercanos al salario mínimo no tienen la posibilidad de ingresar a su “fondo de capitalización individual” un monto suficiente para ejercer este derecho, tomando en cuenta que sus pensiones difícilmente superarían el mínimo fijado por la ley.

El hecho de que la legislación polémica sobre seguridad social y prestaciones sociales hubiera sido formulada conjuntamente por representantes de los trabajadores, los patronos y el Estado, desprestigió el sistema tripartito. Desde comienzos de los años setenta, las comisiones tripartitas habían jugado un papel central en el sistema neocorporativista venezolano (Salamanca 1998: 134-154). Estas comisiones redactaban la legislación, participaban en las decisiones sobre ajustes en el salario mínimo (tal como quedó establecido en la Ley del Trabajo de 1990) y ejercían una función casi-judicial en relación con ciertas materias laborales. El apoyo unánime que prestaron los dirigentes de la CTV a las reformas neoliberales contribuyó a desacreditar a la misma Confederación. Chávez, una vez en el poder, se negó a crear Comisiones Tripartitas (como establece la ley) y rechazó la “política de consenso” en general, con el argumento de que equivalía a un sistema de toma de decisiones por las elites.

2. El gobierno de Chávez y el debate sobre la autonomía sindical

Durante la campaña electoral de 1998, el discurso de Chávez se caracterizó por sus fervorosos ataques en contra de los partidos políticos y en contra de una dirigencia sindical desde hacía mucho tiempo estrechamente vinculada a AD y COPEI. Es más, Chávez y otros de su movimiento se referían a los dirigentes de la CTV como una “mafia sindical”. En consecuencia, las victorias aplastantes en la elección presidencial de 1998 y en la serie de elecciones de 1999 y 2000, colocaron a los dirigentes de la CTV a la defensiva. Esta nueva situación ofreció a los dirigentes sindicales chavistas de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores (FBT) un abanico importante de oportunidades.

Durante los primeros tres años de gobierno, el movimiento chavista se debatía entre moderados y partidarios de una línea dura. Con la creciente agresividad de la oposición a partir de 2001 y las llamadas a derrocar a Chávez, se plantearon estrategias distintas. Los moderados proponían diálogo y concesiones, mientras que los de la línea dura tildaban de “conspiradores” a los opositores y favorecían una respuesta basada en sus propias movilizaciones. Al interior del movimiento laboral chavista, uno de los debates centrales era sobre la autonomía sindical, sobre la relación entre los trabajadores organizados y la sociedad política (el Estado y los partidos políticos). Una tendencia radical era partidaria de aprovechar la coyuntura favorable, con el control del Ejecutivo y de la Asamblea Nacional y el debilitamiento de su adversario, para asestar un golpe contundente a la “mafia sindical”. El dirigente comunista Pedro Eusse resumió este enfoque como “contar simultáneamente con apoyo político desde arriba y con los trabajadores desde abajo” (entrevista personal, 10 de julio de 2001). Esta estrategia soslayaba la autonomía sindical con vistas a promover objetivos de mayor alcance, como la transformación de aquellas estructuras sindicales que se consideraban responsables de fomentar la colaboración de clases y la corrupción. Entre las propuestas consideradas por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) entre 1999 y 2000 y por la Asamblea Nacional en el 2000 se encuentran procedimientos judiciales en contra de los dirigentes laborales corruptos, la confiscación de las propiedades de los sindicatos y la disolución de la CTV para posibilitar la creación de una “confederación laboral unificada”.

Al plantear una alternativa a la estructura de la CTV, la postura radical corría el riesgo de promover un sindicalismo paralelo. A la vez, descartaba completamente la tradición de políticas de consenso heredada de Punto Fijo. De hecho, los radicales rechazaban tajantemente ese consenso, que abarcaba a los dirigentes pro-*establishment* de los partidos políticos, de los trabajadores organizados y de las organizaciones empresariales, y la misma actitud se encontraba reflejada a menudo en los discursos y en las acciones del mismo Chávez. Por ejemplo, el gobierno de Chávez se negó a convocar las Comisiones Tripartitas (con representantes sindicales, empresariales y del Estado) y en su lugar promovía “mesas de diálogo” diseñadas para incorporar a las bases laborales a las discusiones sobre políticas y legislación.

Una tendencia “moderada” del chavismo expresaba su preocupación por las acusaciones de que el chavismo promovía un movimiento sindical “oficialista”, expresadas por actores tanto nacionales como internacionales (como la Organización Internacional de Trabajo-OIT). De hecho, la presión de la OIT explica por qué, hacia finales del año 2000, el gobierno engavetó la propuesta de una Ley de Garantías y Protección de las Libertades Sindicales diseñada para sacudir al movimiento laboral y, de repente, aceptó las “mesas de diálogo” con dirigentes de la CTV (coordinadas por el Ministerio del Trabajo), para discutir temas tales como la reforma de la seguridad social, el desempleo y la unificación del movimiento sindical. Después, los chavistas radicales se quejarían de que estas discusiones no habían estado a la altura de las expectativas y que los dirigentes de la CTV no habían cumplido con los acuerdos logrados sobre la unificación del movimiento laboral y la incorporación de la masa obrera a las elecciones sindicales.

Los chavistas “moderados” advirtieron de los peligros de un “sindicalismo paralelo” que, en los años sesenta, había condenado a los sindicalistas de izquierda a una situación de aislamiento frente al resto de la clase trabajadora. Argumentaron, además, que a nivel mundial, los izquierdistas habían generalmente llegado a la conclusión de que es preferible militar en sindicatos “mayoritarios” y no en sindicatos pequeños comprometidos abiertamente con “objetivos revolucionarios”.

Más allá de estas diferencias sobre estrategia laboral, radicales y moderados se enfrentaron sobre reformas específicas. Los moderados del MVR (Movimiento Quinta República), encabezados por el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Luis Miquilena, se opusieron a la jornada semanal de 40 horas que proponían los cuatro representantes laborales en la ANC. Otro moderado, vicepresidente de la ANC, Isaías Rodríguez, sugirió mecanismos para evitar las prestaciones sociales retroactivas, que los radicales finalmente lograron incorporar a la Constitución (en la cuarta “disposición transitoria”).

3. Las elecciones sindicales de octubre de 2001

A pesar de la creciente polarización de la vida nacional entre chavistas y anti-chavistas, un grupo importante de dirigentes sindicales llegó a

asumir una postura independiente: sin identificarse con el sindicalismo chavista, se alejaba de la dirigencia cetevista. Hasta las elecciones directas para la CTV y sus organizaciones afiliadas en octubre de 2001, estos dirigentes pertenecían a sindicatos cetevistas y se oponían a la creación de una confederación paralela. Modificaron su posición a consecuencia de los encontronazos (hasta físicos) provocados por las elecciones sindicales. Su oposición el año siguiente a las cuatro huelgas generales convocadas por la CTV y Fedecámaras fue un motivo adicional para abandonar la confederación.

Uno de los independientes más importantes era Ramón Machuca, presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica (SUTISS) que representaba a los trabajadores de la compañía siderúrgica privatizada SIDOR. En mayo de 2001, Machuca encabezó una huelga de 21 días contra SIDOR con consecuencias serias para la región de Guayana. Una de las exigencias sindicales era una reducción del número de “empleados de confianza” (muchos de los cuales apoyaron la huelga) porque eran por definición excluidos del contrato. Durante el conflicto, la dirigencia de la CTV ofreció su apoyo, el cual fue aceptado con agradecimientos por Machuca. Sin embargo, se hizo evidente que, mientras que la preocupación de Machuca era netamente gremial, dirigentes de la CTV como Carlos Ortega y Alfredo Ramos (que como Machuca pertenecía a la Causa R) tenían otra agenda. Ramos propuso que la CTV convocara a una huelga general en apoyo a los trabajadores de SIDOR. Ortega sugirió que trabajadores en sectores claves que tenían vencidos sus contratos siguieran el ejemplo de SUTISS y pararan sus labores. Los chavistas del comité ejecutivo de SUTISS también apoyaban la huelga, pero se opusieron a la extensión del conflicto con fines políticos. La huelga culminó con un acuerdo que respondió a las exigencias de los sindicatos, incluyendo un año de inamovilidad para los trabajadores. El Presidente Chávez posteriormente declaró que la huelga se había llevado a cabo con éxito y que tanto el gobierno como los dirigentes sindicales habían aprendido de la experiencia (Díaz Rangel 2002: 130-131).

Elecciones directas para los dirigentes de la CTV y sus federaciones afiliadas (en lugar de aquellas de segundo o tercer grado) habían sido propuestas originalmente por el Frente de Trabajadores Copeyanos (FTC) a mediados de los años 80. Durante la administración de Caldera en los noventa, se combinó una propuesta legislativa de CO-

PEI con otra presentada por la Causa R, dentro del marco de la alianza entre estos dos partidos en el Congreso (conjuntamente con el MAS). AD se opuso categóricamente a la propuesta hasta que, con su propio debilitamiento político después de la elección de Chávez, votó a favor de una resolución en este sentido en el Congreso Extraordinario de la CTV celebrado en 1999.

Los sindicalistas adecos, conscientes de su reputación de ser simples instrumentos de su partido, fundaron el Frente Unitario de los Trabajadores (FUT) que incorporó a militantes de partidos tan disímiles como AD, COPEI, Bandera Roja y la Unión para el Progreso (dirigida por Francisco Arias Cárdenas). A pesar de esta diversidad, Carlos Ortega y Manuel Cova, ambos de AD, ocuparon los dos puestos más importantes de su plancha. De hecho, fue la primera vez en casi cuarenta años que los puestos de Presidente y Secretario General de la CTV estarían ocupados simultáneamente por miembros del mismo partido.

La decisión del FBT de participar en las elecciones de la CTV representó un triunfo para los moderados del MVR que se oponían a una actividad sindical al margen de la confederación. En otra muestra de amplitud, los chavistas eligieron como su candidato a la presidencia de la CTV a Aristóbulo Istúriz de Patria Para Todos (PPT), partido que había tenido relaciones conflictivas con el Presidente Chávez, en lugar de optar por Nicolás Maduro del MVR. Los chavistas evidentemente sentían la necesidad de responder a la preocupación de muchos trabajadores sobre el peligro de un movimiento obrero oficialista, sobre todo porque el Presidente Chávez apoyaba con vigor las posiciones adoptadas por sus seguidores sindicalistas.

En lugar de seguir promoviendo un sindicalismo paralelo en la industria petrolera, Istúriz buscó un frente amplio para derrotar a Carlos Ortega en su intento de reelección para el puesto de presidente de Fedepetrol. En efecto, los chavistas, se abstuvieron de apoyar a su propio candidato, José Gregorio Rodríguez, y optaron por el ex-copeyano Rafael Rosales. Aunque Rodríguez no retiró su candidatura, su campaña era de bajo perfil. El apoyo a Rosales dio importantes frutos, en la medida en que fortaleciera el crecimiento de un movimiento independiente dentro de la CTV que, en los meses posteriores a las elecciones de la CTV, terminaría aliándose con los chavistas.

Las elecciones que se realizaron en octubre de 2001 para la CTV y sus federaciones nacionales y estatales afiliadas fueron acompañadas por muchas alteraciones del orden público, acusaciones de fraude y otras irregularidades y una abstención estimada entre el 50 y el 70%. La Guardia Nacional, respondiendo a la solicitud del CNE (Consejo Nacional Electoral) de proteger la integridad física de sus funcionarios, ocupó los centros de votación en distintas regiones. Las elecciones para la CTV fueron pospuestas en los estados productores de petróleo de Anzoátegui, Zulia, Monagas y Amacuro, mientras que Alfredo Ramos, candidato de la Causa R, exigió un recuento en varios otros estados.

Tres semanas después de las elecciones, la Comisión Electoral de la CTV proclamó a Carlos Ortega presidente y a Manuel Cova secretario general y anunció que el FUT había conquistado el 64,04% de los votos, mientras que el sector oficialista obtuvo el segundo lugar con el 19,25%. Istúriz insinuó que Ortega había ganado las elecciones pero que el porcentaje atribuido al FUT había sido inflado notablemente. De hecho, AD tenía un buen motivo para distorsionar los resultados de esta manera: solamente con un triunfo aplastante del FUT se pudo lograr mantener su control de la CTV mientras que garantizara a sus aliados en la FUT una representación en el comité ejecutivo.

Los conflictos en torno a la elección de octubre llevaron a Ramón Machuca, Rafael Rosales y otros independientes a enfrentarse a la dirigencia adeca de la CTV y ello explica su salida de la organización año y medio después. En el caso de Machuca, también llevó a su salida definitiva de la Causa R. Poco después de las elecciones, la dirigencia nacional de la Causa R había protestado por los incidentes ocurridos en el estado Bolívar que llevaron a la quema de 20 actas de votación y disturbios que dejaron quince heridos. La Causa R culpó a la FUT de fraude (como hizo también Istúriz), más específicamente de haber alterado los resultados para otorgar a su candidato Víctor Moreno (anteriormente de la Causa R) un escaso margen de ventaja sobre Machuca en la elección para la presidencia de la federación. En consecuencia, la dirigencia nacional de la Causa R amenazó con retirarse del proceso electoral de la CTV. Sin embargo, de repente, cambió la línea. De hecho, Machuca se sintió traicionado por su partido cuando sorpresivamente se reconcilió con el FUT, tanto a nivel nacional como estatal.

4. Las huelgas generales de 2001-2003 y sus secuelas

Los antecedentes de las cuatro huelgas generales convocadas por Carlos Ortega durante el curso de un año, eran la exitosa huelga petrolera que él dirigió a mediados del año 2000 y la huelga de los trabajadores siderúrgicos de mayo del 2001, ambas trataron de transformarse en un conflicto nacional. La primera huelga general fue convocada para el 10 de diciembre del 2001. La CTV y Fedecámaras la justificaron para protestar en contra de la promulgación simultánea de 49 leyes en noviembre, muchas de las cuales tenían un contenido popular y nacionalista, sin haberlas sometido a la “consulta nacional” requerida por la Constitución de 1999. En esencia, la huelga era una reacción en contra de la radicalización y aceleración del proceso de cambio. Por cierto, poco antes de la huelga, Chávez había dicho: “La oligarquía exige que eliminemos estas leyes. Esto significa que tenemos que aplicarlas y hacerlo lo antes posible”.

A primera vista, las huelgas generales de diciembre 2001, abril 2002 (que culminó en el golpe frustrado), octubre del 2002 y diciembre a febrero del 2002-2003 parecen dar un mentís a los supuestos de Marx. En los cuatro casos, las organizaciones de trabajadores y de empresarios se juntaron para impulsar la salida de un presidente “revolucionario” o para exigir elecciones presidenciales inmediatas. Pero de hecho, la reacción de los venezolanos a las huelgas dependía en gran parte de su clase, tal como Marx hubiera predicho. Mientras que los barrios más pobres rápidamente volvieron a la normalidad durante las huelgas “indefinidas” de abril 2002 y diciembre-febrero 2002-2003, en las urbanizaciones en donde viven los sectores más acomodados de todas las ciudades del país, se evidenció un apoyo entusiasta.

Durante la huelga general iniciada en diciembre 2002, la llamada de la Coordinadora Democrática (que abarcaba los partidos y las organizaciones no gubernamentales de la oposición) para celebrar cacerolazos cada noche a partir de las ocho encontró receptividad en los sectores de clase media y alta (haciendo recordar los días anteriores al derrocamiento de Allende). Después de tres días de huelga, la oposición declaró su transformación en una “huelga activa”, lo que significaba movilizaciones en la calle. Poco después, las entradas a las refinerías fueron escenarios de protestas por parte de personas de la clase media que intentaban impedir el acceso a las plantas de sus trabajado-

res, a veces tildándolos de “rompe-huelgas”. Los dirigentes chavistas, por su parte, caracterizaron a la huelga como un paro empresarial (*lockout*). Además de los obreros petroleros, las organizaciones laborales que representaban a los trabajadores de la industria pesada de la región de Guayana se negaron a apoyar la huelga, tal como en el caso de los empleados públicos y los trabajadores del Metro de Caracas. Los dirigentes de estos sindicatos, que pertenecían a la CTV y no eran considerados pro-chavistas, surgieron como una tercera fuerza en el movimiento laboral del país.

Los dirigentes laborales “independientes” Rafael Rosales, Ramón Machuca, Franklin Rondón y Francisco Torrealba (presidente de los trabajadores del metro) se opusieron a las huelgas generales por dos razones. Primero, no estaban de acuerdo con la alianza con Fedecámaras, el adversario tradicional de la clase obrera. Segundo, señalaron que Ortega y otros dirigentes de la CTV no los habían consultado antes de llamar a las huelgas.

En el caso de Fedepetrol, Rosales entró en conflicto con el secretario general de la federación, Félix Jiménez, que había argumentado a la hora de la huelga de abril que la violación en PDVSA (Petróleos de Venezuela, SA) del sistema meritocrático y los intentos de llenar los puestos profesionales con partidarios del gobierno se aplicaría posteriormente a la nómina menor de trabajadores. Después de la huelga de abril, el gobierno se abstuvo de aplicar represalias en contra de los ejecutivos de la industria y de otros profesionales identificados estrechamente con la oposición y que seguían haciendo una labor política dentro de la empresa. De manera que el argumento institucional de Jiménez parecía de poca relevancia cuando se planteaba la huelga de diciembre. Además, las demandas económicas de los trabajadores de PDVSA, que llevaron a Rosales a considerar un apoyo a la huelga de octubre, habían sido satisfechas posteriormente con el acuerdo con el gobierno sobre el contrato colectivo. Rosales especialmente apoyó la restitución de la cláusula que asignaba al sindicato el 60% de las contrataciones. De esta manera, Rosales podía argumentar en diciembre que la huelga general no tenía ningún contenido gremial y estaba motivada políticamente.

A pesar de que el fracaso de la huelga general de diez semanas iniciada en diciembre hiciera mucho para desacreditar a la CTV, algunos de los sindicalistas chavistas seguían renuentes de abandonar la

CTV para formar una organización rival. Así, por ejemplo, la facción de trabajadores petroleros llamada La Jornada (que estaba encabezada por José Gregorio Rodríguez y que durante diez años había jugado un papel importante entre los sindicatos petroleros del oriente del país) se encontraba dividida en torno a este punto. Algunos miembros recurrían a los argumentos ya señalados sobre los peligros de desprenderse de los sindicatos mayoritarios y aislarse de la clase obrera.

Sin embargo, varios acontecimientos recientes fortalecieron la posición de aquellos favorables a la creación de una nueva confederación. Primero, la CTV se encontraba desacreditada por el fracaso de la última huelga general y, sobre todo, por su prolongada alianza con Fedecámaras. Los meses siguientes parecían el momento ideal para asestarle a la CTV un golpe mortal. Se argumentaba que si los chavistas no rompían completamente con la CTV, perderían el respeto de los trabajadores. Segundo, durante el golpe frustrado de abril, Luis Miquilena y sus seguidores, que habían sido los defensores más consecuentes de la estrategia de trabajar dentro de la CTV, habían abandonado el MVR. Por último, el desastre electoral de la CTV en octubre de 2001 y las huelgas generales posteriores, habían fomentado el surgimiento de un grupo de dirigentes sindicales independientes que, en su mayoría, estaban dispuestos de romper definitivamente con la CTV.

Inmediatamente después del fracaso de la última huelga general, los independientes más importantes, incluyendo a Machuca, Rosales, Torrealba y Rondón, recorrieron el país organizando apoyo para una nueva confederación. Machuca estaba convencido de que la única manera de evitar que a esta nueva confederación se le tildara de “oficialista” era nombrar como presidente a uno de los independientes. Originalmente, Machuca había propuesto el nombre de Rondón para el puesto, pero rápidamente se acordó que fuera el mismo Machuca quien encabezara la nueva organización. Sin embargo, en la reunión que fundó la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), celebrada en Caracas en marzo del 2003, los chavistas del FBT propusieron una estructura “horizontal” con una coordinadora nacional de 21 miembros, sin que hubiera nombramientos para puestos específicos como la presidencia o la secretaría general. Lograron convencer a los dirigentes independientes, con la excepción de Machuca que se negó a incorporarse. Posteriormente hubo encuentros entre Machuca y la UNT y no se descartaba una reconciliación.

Los fundadores del UNT insistieron en que la nueva confederación evitaría las estructuras y las prácticas que en el pasado habían llevado a corrupción, control político y colaboración de clases. El derecho de pedir un referéndum revocatorio se concibió como un mecanismo para evitar que los dirigentes se alejaran de las bases de su organización. Adicionalmente, los dirigentes del UNT se empeñaron en protegerse en contra del peligro de que la organización cayera en manos de burócratas sindicales carentes de vínculos permanentes con las bases. De manera que aquellos políticos, incluyendo diputados nacionales, que decían representar a los trabajadores pero que no contaban con seguidores entre los sindicatos se consideraban “asesores”, y los 21 coordinadores eran elegidos entre activistas sindicales. La UNT pudo atraer dirigentes nacionales importantes de federaciones representando a empleados públicos, maestros, la industria pesada de la región de Guayana, el metro, las industrias de la electricidad y de telecomunicaciones, como también a trabajadores de las plantas de Ford y Mavesa. Sin embargo, con la excepción de Amacuro y (en menor medida) Carabobo, la UNT fracasó en el intento de incorporar a dirigentes de las federaciones estatales afiliadas a la CTV.

La UNT asumió posiciones que reflejaban los intereses de los trabajadores, aun cuando no necesariamente respondían a la línea del MVR. Así llamó al gobierno a introducir un decreto para facilitar el control obrero de aquellas empresas quebradas en manos del Fondo de Garantías de Depósitos (FOGADE). Los empleados de Macuto Sheraton, por ejemplo, asumieron la dirección del complejo hotelero cuando éste se declaró en bancarrota y había situaciones parecidas en otras empresas del país. Indudablemente, los dirigentes de la UNT fueron influenciados por los acontecimientos en Argentina, donde la crisis económica y financiera de los últimos años ha impulsado experimentos de autogestión.

La dirigencia de la UNT, a diferencia de sus homólogos en la CTV, insistieron en que fueran las empresas que habían cerrado sus puertas en diciembre las que pagaran los platos rotos provocados por la huelga. En contraste con este discurso, algunos dirigentes sindicales firmaron acuerdos reconociendo la suspensión de los acuerdos colectivos, la suspensión temporal de trabajadores y la exclusión de los salarios correspondientes al período de la huelga de los cálculos sobre otros beneficios. Estas concesiones tenían como propósito otorgarle a

la empresa un compás de espera, para evitar la bancarrota en el período difícil después de la huelga.

La huelga de diciembre también puso en el tapete un asunto que se venía discutiendo dentro del movimiento laboral chavista desde que Chávez ganara la elección presidencial: la necesidad de sacar de la administración pública a aquellos empleados considerados no confiables. Después de la huelga, los chavistas de línea dura insistieron en una purga completa en la industria petrolera. 18.000 empleados que habían participado en la huelga, en su mayoría de la nómina mayor, fueron despedidos por su responsabilidad en la paralización de la industria (y hasta de actos de sabotaje). Los chavistas de línea dura advirtieron que muchos empleados que habían apoyado la huelga intentaban regresar a la industria, consiguiendo trabajo con contratistas, sin que los nuevos ejecutivos actuaran para impedirlo.

La línea dura era partidaria de extender la purga dentro de la industria petrolera para que abarcara a los trabajadores de la nómina menor, una exigencia que podría considerarse políticamente motivada por cuanto durante muchos años, Fedepetrol había sido un bastión de AD. De hecho, después de la huelga, se redujo la nómina de los obreros (nómina menor) en un 28% (estadística proporcionada por PDVSA al “PCV Energy” de Washington). También se argumentaba que, en la selección de personal para reemplazar a quienes se habían plegado a la huelga, debieran tener preferencia los chavistas que habían arriesgado sus vidas durante la huelga, formando brigadas cívicas para resguardar la seguridad de las instalaciones petroleras. Sin duda, esta exigencia también formaba parte de una estrategia sindical diseñada para consolidar el control de Rosales en Fedepetrol y la salida de la federación de la CTV. Además, los de la línea dura señalaron otros lugares dentro del sector público, como educación y la empresa de electricidad Cadafe, en donde los seguidores de Luis Miquilena y otros “enemigos del proceso revolucionario” ocupaban puestos claves y asumían posturas inamistosas para con los empleados chavistas (*Tribuna Popular* 2003: 6). El reemplazo de empleados pertenecientes a los partidos tradicionales por chavistas evidentemente involucraba el riesgo de transformarse en una simple operación de clientelismo político, una tradición profundamente enraizada en Venezuela.

La estrategia chavista buscaba ganar, o por lo menos neutralizar, actores internacionales que habían respaldado a la CTV cuando ar-

gumentaban que Chávez violaba convenios internacionales sobre la libertad sindical. A pesar de que el Presidente John Sweeney de la AFL-CIO (American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations) norteamericana se había comprometido a revisar la política exterior virulentamente anticomunista de su confederación, el movimiento obrero norteamericano respaldó los intentos de los dirigentes sindicales tradicionales venezolanos de recuperar su influencia y, posteriormente, de derrocar a Chávez. La AFL-CIO canalizó fondos de la National Endowment for Democracy (financiado por el Congreso de los Estados Unidos) hacia la CTV, y más que duplicó sus aportes en 2001. El 27 de febrero de 2003, el Comité Ejecutivo de la AFL-CIO aprobó una resolución expresando su seria preocupación “por el orden de detención recientemente promulgado en contra de Carlos Ortega, por acusaciones de traición, rebelión civil, instigación de crímenes y devastación”. El representante de la organización para América Latina, Stan Gacek, sostuvo que, durante los eventos de 2002 su organización se había empeñado en fortalecer las fuerzas progresistas en el movimiento obrero venezolano. Gacek agregó que “ayudó un proceso que llevó miembros de la izquierda... a la dirección de la CTV” (Shorrock 2003: 21). No obstante, como comentó este autor en *The Nation*, respondiendo a la afirmación de Gacek,

Dentro de la CTV no hay ninguna corriente a nivel nacional que haya cuestionado la obsesión de la confederación por derrocar a Chávez por cualquier vía – aun en detrimento de los intereses obreros. Entonces, ¿quiénes eran estos “izquierdistas” de la CTV supuestamente favorecidos por los esfuerzos de la AFL-CIO? (Ellner 2003).

La cuestión de autonomía *vis-à-vis* partidos políticos también se debatió en el campo anti-chavista durante 1999 y 2000. Un ejemplo de la adopción de una posición independiente se presentó durante la campaña electoral a nivel municipal en diciembre 2000, celebrada conjuntamente con el referéndum sobre los sindicatos. La CTV, controlada por AD, llamó a la abstención, mientras que el partido recomendó a sus militantes a votar para derrotar la proposición y favorecer sus propios candidatos.

Sin embargo, la polarización extrema que se produjo a partir del año 2001 borró las diferencias entre los dirigentes obreros de la oposición, y entre éstos y sus respectivos partidos. Dentro de la CTV, algunos de los dirigentes no-adecos expresaron críticas tímidas a las rela-

ciones tan estrechas entre la confederación y el tradicional adversario del movimiento laboral, Fedecámaras, pero estas críticas no trascendieron y no se profundizaron. Después del fracaso de la huelga general de 2002-2003, algunos miembros del comité ejecutivo de la CTV intentaron comprometer la confederación con un proceso de renovación, específicamente a favor de la creación de sindicatos nacionales por rama de industria, una propuesta planteada originalmente en 1959. Pablo Castro, un miembro del comité ejecutivo, consideraba que con el exilio de Carlos Ortega el momento era propicio para realizar cambios en la confederación. El deslinde fundamental dentro del comité ejecutivo era entre, por una parte, aquellos como Castro y el secretario general Manuel Cova (que pertenecía al grupo de negociadores que se reunía con el secretario general de la OEA (Organización de Estados Americanos), César Gavira) y, por la otra, Ortega que se encontraba identificado con el ex-secretario general de AD, Rafael Marín que proponía salir de Chávez por cualquier vía. De hecho, Castro y otros intentaron reemplazar Ortega por Cova en la presidencia de la CTV pero fue regañado públicamente por Henry Ramos, presidente de AD, por intentar aprovechar la ausencia de Ortega.

En todo caso, lo más importante es que, fueran lo que fueran las críticas de miembros del comité ejecutivo, no hubo ningún esfuerzo organizado para moderar el empeño en sacar a Chávez de la presidencia de la República. Ningún miembro del comité ejecutivo llegó a plantear una “autocrítica” a raíz del fracaso de la huelga general, ni cuestionar la alianza con Fedecámaras. De hecho, esta insistencia en no reconocer sus errores explica en gran parte por qué se permitió que la huelga siguiera hasta agotarse, en lugar de suspenderla después del primer mes, cuando ya era evidente que tenía pocas posibilidades de éxito. Este fracaso no solamente tuvo consecuencias devastadoras para la economía nacional; también contribuyó a desacreditar a la oposición y, en particular, a la CTV.

5. Conclusión

La cuestión de autonomía *vis-à-vis* el Estado y los partidos políticos, y el peligro de la creación de un movimiento laboral “oficialista”, han estado en el centro de los debates recientes al interior del movimiento laboral organizado. Así AD, por primera vez en su historia, promovió

la creación de una coalición como el FUT para las elecciones sindicales, en un intento de convencer a los trabajadores, que no tenía la intención de buscar un control absoluto de la CTV. La misma preocupación explica por qué el FBT chavista decidió apoyar a Aristóbulo Asúriz, que poco antes había tenido un desencuentro con Chávez, como candidato en las mismas elecciones, en lugar de respaldar a Nicolás Maduro del MVR. También explica por qué la nueva UNT incorporó a su Coordinadora Nacional exclusivamente a activistas sindicales, excluyendo deliberadamente a “burócratas” laborales.

Era muy difícil que el movimiento obrero venezolano se aislara del proceso de polarización extrema que, a partir de 1998, dividió a la nación en bloques pro- y anti-Chávez. No obstante, el movimiento obrero es menos polarizado de lo que pareciera a primera vista (sobre todo si la fuente de información son los medios de comunicación). De hecho, un número significativo de puestos claves, tanto a nivel de sindicato como de federación, se encuentran ocupados por dirigentes obreros independientes. Es más, la posición de los dirigentes obreros del MVR frente a reformas importantes, como la seguridad social (la Ley Orgánica de Seguridad Social en diciembre 2002 es considerada “una conquista laboral”) y las prestaciones sociales, no coincide con la de otros dirigentes del partido.

La situación actual en el movimiento obrero organizado puede compararse con aquella de los primeros años de democracia después del 23 de enero de 1958. En aquel entonces, la nación se encontraba polarizada pero los dirigentes laborales de los distintos partidos propusieron una candidatura unida para las elecciones presidenciales de diciembre 1958. Además, a pesar de la creciente conflictividad política durante el año siguiente, en noviembre 1959 la CTV celebró un “Congreso de Unidad”. No cabe duda de que los intereses de los obreros venezolanos fueron perjudicados por las posteriores confrontaciones y divisiones en el movimiento en el contexto de la lucha armada de los años sesenta. Hoy en día los dirigentes obreros enfrentan desafíos parecidos. Lo más importante a tomar en cuenta es que la polarización y politización extremas dentro del movimiento obrero conlleva el riesgo de dos escenarios indeseables: el sindicalismo paralelo y la creación de un movimiento obrero oficialista.

Bibliografía

- Battaglini, Óscar (1993): *Legitimación del poder y lucha política en Venezuela: 1936-1941*. Caracas: UCV.
- Coppedge, Michael (1994): *Strong Parties and Lame Ducks: Presidential Partyarchy and Factionalism in Venezuela*. Stanford: Stanford University.
- Díaz Rangel, Eleazar (2002): *Todo Chávez: De Sabaneta al golpe de abril*. Caracas: Planeta.
- Ellner, Steve (1980): *Los partidos políticos y su disputa por el control del movimiento sindical en Venezuela, 1936-1948*. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello.
- (1995): *El sindicalismo en Venezuela en el contexto democrático (1958-1994)*. Caracas: Tropykos.
- (2000): “El impacto de la privatización sobre la fuerza laboral en Venezuela: ¿reorganización radical o ajuste moderado?”. En: *Politeia* núm. 25, pp. 37-75.
- (2003): “Letter to the Editor” en respuesta al artículo de Tim Shorrock, “Labor’s Cold War” publicado en *The Nation* (19 de mayo, 2003).
- Levine, Daniel (1978): “Venezuela since 1958: The Consolidation of Democratic Politics”. En: Linz, Juan/Stepan, Alfred: *The Breakdown of Democratic Regimes: Latin America*. Baltimore: Johns Hopkins University, pp. 82-109.
- Mogollon, Mary (1994): “El sindicalismo en Venezuela”. En: *VenEconomía* (Abril), pp. 9-11..
- Navarro, Juan Carlos (1995): “In Search of the Lost Pact: Consensus Lost in the 1980s and 1990s”. En: McCoy, Jennifer/Serbin, Andrés/Smith, William/Stambouli, Andrés: *Venezuelan Democracy under Stress*. New Brunswick/New Jersey: Transaction Publishers, pp. 13-31.
- Naím, Moisés (1993): *Paper Tigers and Minotaurs: The Politics of Venezuela’s Economic Reforms*. Washington: Carnegie Endowment.
- Salamanca, Luis (1995): “The Venezuelan Political System: A View from Civil Society”. En: McCoy, Jennifer/Serbin, Andrés/Smith, William/Stambouli, Andrés: *Venezuelan Democracy under Stress*. New Brunswick/New Jersey: Transaction Publishers, pp. 197-241.
- (1998): *Obreros, movimiento social y democracia en Venezuela*. Caracas: UCV.
- Shorrock, Tim (2003): “Labor’s Cold War”. En: *The Nation* (19 de mayo).
- Tribuna Popular* (2003) “Cadafe y sus filiales: objetivos de la conspiración” (primera quincena de marzo), p. 6.
- VenEconomía* (2002): “Informe Económico Trimestral” (enero).